



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El **Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea**, presenta, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente **Proposición no de Ley** para su debate y aprobación en la **Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia**, relativa a la **situación de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en el Estado de Palestina afectados por la ocupación de Israel** y las acciones que España podría emprender en pos de su protección.

Congreso de los Diputados, Madrid, 7 de noviembre de 2017

Pablo Bustinduy Amador
Portavoz Asuntos Exteriores

Ione Belarra Urteaga
Portavoz del GP
Portavoz Infancia y Adolescencia

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El prolongado conflicto político entre Palestina e Israel ha devenido en una prolongada crisis de protección humanitaria en los territorios ocupados por Israel con un «impacto devastador en el bienestar, la seguridad física y el futuro de las niñas y los niños. Las restricciones y la violencia relacionada con el conflicto han dejado a los niños y niñas con una profunda sensación de inseguridad para su futuro, mientras que los mecanismos familiares y de la comunidad se ven debilitados por el régimen de cierre, el conflicto y la privación», según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Según la Oficina Palestina de Estadísticas (PCBS, según sus siglas en inglés), el 46,2% de los 4.682.467 palestinos y palestinas censados en 2015 tenían menos de 18 años de edad.

Los niños y niñas palestinas sufren de manera especial la ocupación israelí de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza -que cumple ya 10 años en una situación de bloqueo-, territorios que, junto a los Altos del Golán, la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió desocupar a Israel. Según la oficina de Palestina de la ONG Defence for Children (DCI) se encuentran sometidos a violaciones de sus derechos en diferentes aspectos: detenciones militares; justicia juvenil militar para los niños y niñas palestinas diferenciada de los niños y niñas israelíes; violencia, muertes y otros daños.

La Convención de los Derechos del Niño es el principal instrumento en materia de Derecho Internacional para la protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, desde que se aprobase, con rango de Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989. Como ocupante de estos territorios, el Estado de Israel es responsable de la correcta aplicación de la Convención de Derechos del Niño, así como del resto de normativa internacional de derechos humanos.

El **Artículo 37 de la Convención** es contundente al dictaminar que i) *ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;* y ii) *ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará **tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.***

Según la ONG palestina Addameer, con fecha de julio de 2017¹, están encarcelados en prisiones y centros de seguridad 300 niños y niñas palestinas (75 de ellos en Jerusalén Este, ciudad en la que se encuentran especialmente desprotegidos por el

¹ Ver aquí: http://www.addameer.org/the_prisoners/children

auge de la colonización y la violencia) menores de 18 años en prisiones y otras instalaciones de seguridad israelí. Algunos de ellos y ellas han sido detenidos bajo lo que Israel denomina detenciones administrativas -encarcelamientos sin cargos por razones de seguridad que se pueden extender durante años-, figura jurídica denunciada por Amnistía Internacional por infringir el derecho internacional en materia de detención arbitraria y derecho a un juicio justo. El cargo más común contra los niños y niñas es el lanzamiento de piedras, punible con hasta 20 años de cárcel. La misma ONG calcula que, desde el año 2000, más de 12.000 niños y niñas palestinas habrían sido arrestados/as.

Tras haber sido arrestados en sus casas e interrogados durante horas o días, los niños y niñas palestinas permanecen en prisiones, centros de detención o bajo arresto domiciliario, sujetos y sujetas al mismo tratamiento de las personas adultas. En virtud de la Orden Militar israelí n.º 1644, emitida el 29 julio de 2009, se establecía una Corte Militar separada para niños y niñas tras haberles juzgado durante 42 años en los mismos tribunales que las personas adultas. Las detenciones basadas en legislación militar israelí sólo aplicables a población palestina han sido calificadas como constitutivas de delito de apartheid en el informe «Prácticas Israelíes contra el Pueblo Palestino y la Cuestión del Apartheid» presentado por la Comisión Económica y Social del Asia Occidental de las Naciones Unidas el pasado 15 de marzo, basando sus conclusiones en la Convención Internacional por la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid (1973).

Las ONG israelíes B'tselem y HaMoked, por su parte, han documentado, con fecha de octubre de 2017², las condiciones de arresto a las que se ven sometidos y sometidas muchos/as adolescentes palestinos/as residentes en Jerusalén Este. Según las ONG, pese a que las autoridades israelíes cumplir, técnica y nominalmente, la normativa y legalidad, violan de manera sistemática sus derechos (a permanecer en silencio, recibir consejo y estar en compañía de sus familias durante los interrogatorios) y abusan de arrestos, restricciones físicas, arrestos nocturnos y condiciones de detención. Estas violaciones afectan a los derechos, salud y desarrollo de los niños y niñas así como de sus familias.

El Estado de Israel ratificó la Convención en el año 1991, pero su aplicación ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos estamentos pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas. En primer lugar, del **Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia** (UNICEF). En 2010 este organismo criticó que Israel por no crear una comisión de carácter ejecutivo sobre derechos de la infancia, con vistas a implementar una estrategia estatal de protección de derechos de la infancia, o tan siquiera para vigilar la implementación de la propia legislación israelí existente en la materia. UNICEF ha sido también muy crítico con la sempiterna defensa utilizada por Israel, que sigue

² Ver aquí: http://www.btselem.org/publications/summaries/201710_unprotected

sosteniendo que la Convención no es susceptible de aplicarse en el territorio de Cisjordania, y que **sigue situando la mayoría de edad en los dieciséis años para el caso exclusivo de la población palestina**, a pesar de que la Convención es clara al situar el límite en la edad de dieciocho.

Según un Informe de febrero de 2013³ del UNICEF, **«el maltrato de niños y niñas palestinas en el sistema militar de detenciones israelí aparenta estar extendido, sistematizado e institucionalizado»**. UNICEF constata que **en ningún otro país existen este tipo de Tribunales** para niños y niñas que no proveen de las garantías necesarias para hacer cumplir los derechos de la infancia. Concluye, además, que el patrón de dicho maltrato incluye, entre otros: i) proceder al arresto entre la medianoche y las 5.00 AM por parte de soldados fuertemente armados; ii) la práctica de vendar los ojos de los infantes y atar sus manos con amarres de plástico; iii) abusos físicos y verbales durante el traslado al lugar del interrogatorio; iv) la falta de acceso a agua, comida, servicios higiénicos y cuidados médicos; v) interrogatorios en los que se hace uso de violencia física y de amenazas; vi) confesiones falsas, extraídas bajo uso de la fuerza; vii) falta de acceso a una defensa o a que estén presentes integrantes de su familia durante los interrogatorios. UNICEF dictamina que estas prácticas constituyen «violaciones del Derecho Internacional que protege a los niños y niñas contra el maltrato que puedan sufrir al entrar en contacto con fuerzas de orden público, instituciones judiciales y/o militares». Huelga decir que la legislación internacional prohíbe el uso de «tortura y otros tratos o castigos inhumanos, crueles o degradantes bajo cualquier circunstancia».

En 2012, el **Comité de los Derechos del Niño**⁴ (en adelante CRC, según sus siglas en inglés), vertió asimismo duras críticas sobre Israel tras los bombardeos en la Franja de Gaza, reconociendo que la destrucción de hogares y el daño a escuelas, calles y otros lugares públicos afecta gravemente a los menores, concluyendo que estas acciones suponían violaciones graves tanto de la Convención de Derechos del Niño como del *Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participación de niños en conflictos armados*⁵. De hecho, sólo durante los bombardeos a Gaza en 2014, según datos de UNICEF murieron 500 niños y niñas, 3.374 fueron heridos -de los que casi un tercio sufren discapacidades desde entonces- y 1.500 se quedaron en situación de orfandad. Las muertes de niños y niñas palestinas no se limitan a los bombardeos y operaciones israelíes, sino también a la violencia en controles e incursiones del ejército de Israel así como en manifestaciones y también al incremento de la violencia de los colonos israelíes, en algunos casos incluso en su camino cotidiano hacia la escuela. Entre los casos más conocidos se encuentran

³ Disponible aquí:

https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf

⁴ Organismo de las Naciones Unidas cuya función es la de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.

⁵ Ratificado por Israel el 18 de julio de 2005.

Mahmoud Shalaan, de 16 años, abatido a tiros por soldados israelíes en Ramala en marzo de 2016 y el bebé muerto, junto con varios de sus familiares al quemar unos colonos su casa en Duma en agosto de 2015. En los tres últimos años, la ONG DCI Palestine contabilizó la muerte de 31 (2015), 35 (2015) y 10 (enero a julio de 2017). La exposición a los efectos de violencia y guerra crónica está afectando a la salud mental de los niños y niñas palestinas.

Más concretamente, las conclusiones del último examen periódico del Comité de los Derechos del Niño sobre el Estado de Israel, contenidas en el documento de **Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo a cuarto de Israel**⁶, son contundentes a pesar de «la persistente negativa del Estado parte a proporcionar información y datos y a responder a las preguntas escritas del Comité sobre los niños que viven en el Territorio Palestino Ocupado, incluidos Jerusalén Oriental y el Golán sirio ocupado, afecta enormemente a la adecuación del proceso de presentación de informes y a la rendición de cuentas del Estado respecto de la aplicación de la Convención» (*sic*). Recoge, como **principales motivos de preocupación y recomendaciones**, entre otros:

- i. Cese la construcción del muro en el Territorio Palestino Ocupado y levante por completo el bloqueo de Gaza, y permita de manera urgente la entrada de todos los materiales de construcción que necesitan las familias palestinas para reconstruir las viviendas e infraestructuras civiles a fin de garantizar el respeto de los derechos de los niños a la vivienda, la educación, la salud, el agua y el saneamiento, como recomienda en particular el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/ISR/CO/14-16, párr. 26), y en consonancia con el Manual sobre el Derecho de la Guerra de Israel (1998), que prohíbe aplicar políticas de quema de tierra "con el fin de causar hambre o sufrimiento a la población civil".
- ii. Recuerda al Estado parte **su responsabilidad ineludible de prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos de los niños** que viven en el Territorio Palestino Ocupado, que no solo constituyen una **grave vulneración del artículo 37 a) de la Convención sobre los Derechos del Niño**, sino también del artículo 32 del Cuarto Convenio de Ginebra. El Comité insta encarecidamente al Estado parte a que:
 - a. Ponga inmediatamente fin al régimen de aislamiento de todos los niños.
 - b. Inicie sin demora una investigación independiente de todos los presuntos casos de tortura y malos tratos de niños palestinos.
 - c. Adopte medidas inmediatas para que los niños que viven en el Territorio Palestino Ocupado dispongan de mecanismos de denuncia seguros y adaptados a sus necesidades, en particular durante los juicios, por el trato sufrido en el momento de su detención y posterior encarcelamiento.

⁶ Aprobadas por el Comité en su 63º período de sesiones. Documento original disponible aquí: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fISR%2fCO%2f2-4&Lang=en

- iii. El Comité insta encarecidamente al Estado parte a que garantice la aplicación de las normas relativas a la justicia juvenil a todos los niños sin discriminación alguna, así como la **celebración de juicios rápidos e imparciales de conformidad con las garantías procesales mínimas**. También lo insta a que desmantele **el sistema institucionalizado de reclusión, tortura y malos tratos de niños palestinos en todas las etapas del procedimiento judicial**. Todas las personas que hayan tomado parte en este sistema ilegal deberían ser juzgadas y castigadas si se las declara culpables. El Comité también insta al Estado parte a que cumpla las recomendaciones que formuló en 2002 y 2010 y que han sido reiteradas constantemente por todos los mecanismos de derechos humanos, el Secretario General de las Naciones Unidas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y, en particular, a que:
- a. Revise y modifique todas las leyes que permiten condenar a niños palestinos a 20 años de prisión por haber lanzado piedras y ponga en libertad a todos los niños que estén reclusos por ese motivo.
 - b. Se asegure de que los niños reclusos tengan acceso efectivo a un examen judicial independiente de la legalidad de su detención y reclusión en un plazo de 24 horas desde el momento de su detención, reciban asistencia letrada adecuada, gratuita e independiente inmediatamente después de su detención y puedan ponerse en contacto con sus padres o con familiares cercanos.
 - c. Vele por que los niños acusados de haber cometido delitos contra la seguridad solo sean reclusos como medida de último recurso, en condiciones adecuadas acordes con su edad y vulnerabilidad y durante el período de tiempo más breve posible. En caso de duda sobre si se ha alcanzado la edad de responsabilidad penal, se presumirá que el niño no ha llegado a esa edad.

Sin embargo, y a pesar de la contundencia de estas y otras recomendaciones, lo que el CRC reconoce como un **el sistema institucionalizado de reclusión, tortura y malos tratos** continúa vigente en Israel. Está previsto que Israel pase por un nuevo examen periódico ante el Comité de los Derechos del Niño en 2018, habiendo contraído la obligación de someter el Informe País para su consideración ante dicho Comité antes del 2 de noviembre de 2018⁷.

Además, los niños y niñas palestinas sufren las consecuencias de la ocupación israelí. En el caso de Gaza, el bloqueo y las tres operaciones guerras israelíes de los últimos diez años, especialmente la sufrida en 2014, entre las 18000 casas e infraestructuras devastadas por los bombardeos 258 escuelas y guarderías fueron

⁷ Es necesario, asimismo, que el Estado de Israel se comprometa en tiempo y forma a cumplir con los tiempos exigidos por el CRC. En su último examen periódico, la fecha límite de entrega del Informe País (que ha de finalizar el propio estado) se situó en el 1 de noviembre de 2008, pero no se formalizó hasta el 11 de junio de 2010.

dañadas. Tres años después, debido al bloqueo restringe la entrada de materiales de construcción, apenas una pequeña parte de ellas han podido ser reparadas. Los daños en los colegios y guarderías agravan la falta de espacio que obligaba antes de 2014 a realizar varios turnos ante las dificultades de abrir nuevas escuelas. Los niños y niñas sufren, como sus mayores, la gravísima crisis medioambiental provocada por la destrucción del sistema de aguas residuales y sistemas sanitarios, escasez de agua, cortes en electricidad, hospitales que no pueden funcionar a toda su capacidad por falta de energía y un elevado nivel de desempleo (43%) y dependencia de la ayuda humanitaria (80%), según datos de UNICEF.

En Cisjordania, el acceso a la educación de los niños y niñas palestinas se ve afectado por las demoliciones israelíes de escuelas y sus propios hogares. Sólo en los últimos meses, el ejército israelí ha demolido la escuela de Jub al-Dib, cerca de Belén, unas instalaciones donadas por la Unión Europea, dejando a 80 niños y niñas sin escuela. En riesgo de demolición se encuentra también la escuela de Khan Al Ahmar, junto con el resto de su comunidad amenaza de riesgo de transferencia forzada, actualmente pospuesta gracias a la intermediación de la OCHA y UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la Atención de Refugiados y Refugiadas de Palestina). En esta zona, los niños y niñas también sufren las consecuencias de la política de falta de permisos, re-zonificación y demoliciones de hogares palestinos. Según datos del PCBS, en 2014 —últimos datos disponibles, 110 niños y niñas y 540 personas adultas fueron expulsadas de manera forzada al sufrir demoliciones de sus casas. En lo que llevamos de 2017, la ONG israelí ICAHD (Comité Israelí contra el Derribo de Casas) ha contabilizado 351 estructuras demolidas y 528 personas desplazadas. ICAHD estima, según los datos de OCHA, en 50.000 las personas palestinas desplazadas de Jerusalén Oriental y Cisjordania desde 1967.

Por todo ello se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

«1.º Que, en sus relaciones bilaterales para con el Estado de Israel, muestre su preocupación por el incumplimiento de las recomendaciones vertidas por el Comité de los Derechos del Niño en sus *Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo a cuarto de Israel aprobadas por el Comité en su 63º período de sesiones*; muy especialmente respecto de las consecuencias de la ocupación, prevención y erradicación de los malos tratos y sobre el sistema institucionalizado y discriminatorio de justicia para los niños y niñas palestinos.

2.º Que, en sus relaciones bilaterales para con el Estado de Israel, el Gobierno apueste por atraer a su homólogo hacia la ratificación ratifique todos los tratados fundamentales de derechos humanos en los que aún no es parte, a saber: el *Tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones* y la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, así como los *Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, el *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*, y la *Convención contra la Tortura y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*.

3.º Que, en sus relaciones bilaterales para con el Estado de Israel, y las realizadas junto con el resto de Estados de la Unión Europea, España y sus socios demanden la materialización de compensaciones por la destrucción de escuelas financiadas bien por la Cooperación Española o por la cooperación de la Unión Europea, asegurando así el derecho a la educación de los niños y niñas palestinas.»